

UNITED FOR A JUST FUTURE

IndustriALL Global Union 3rd Congress
14-15 September 2021

Resolución en apoyo de la democracia en Myanmar

La Federación de Trabajadores Industriales de Myanmar (IWFM), afiliada a la Confederación de Sindicatos de Myanmar (CTUM) desea presentar esta resolución al Congreso de IndustriALL, que se celebrará del 14 al 16 de septiembre de 2021, para su aprobación.

El 1 de febrero de 2021, un golpe de Estado del ejército en Myanmar provocó la detención de Win Myint y Aung San Suu Ky, los líderes elegidos democráticamente de la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés), y de muchos otros líderes políticos, horas antes de la ceremonia de juramentación del nuevo Parlamento y de la formación de un nuevo gabinete. Desde entonces, la junta militar ha llevado a cabo detenciones, asesinatos y otras formas de violencia contra políticos, activistas y trabajadores en el país.

Cientos de miles de ciudadanos y trabajadores participaron en manifestaciones pacíficas en todo el territorio. Por su parte, los sindicatos han sido fundamentales en la organización del Movimiento de Desobediencia Civil en contra del golpe y de las brutales violaciones de los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales, los arrestos, las violaciones y la quema y destrucción de aldeas, hospitales e iglesias. Los militares han asesinado al menos a 945 personas, detenido a más de 7000 y emitido más de 1900 órdenes de arresto.

Cientos de miles de trabajadores ya perdieron sus empleos (al menos 250.000 en el sector de la confección, 500.000 en el de la construcción, 125.000 en la enseñanza y 65.000 solamente en el sector turístico). Los sindicalistas y trabajadores que participan en las manifestaciones están siendo acosados por los militares. Muchos dirigentes sindicales han tenido que esconderse y varios han sido detenidos, al tiempo que a muchos otros les anularon sus pasaportes. Arrestan a las personas luego de sacarlas de sus propias casas por la noche. Bajo custodia militar o policial, los detenidos sufren torturas brutales y a menudo terminan muertos. Muchos lugares de trabajo y zonas industriales, como Hlaing Thar Yar y Shwepyitha, han sufrido ataques violentos por parte del ejército. La ONU estima que 200.000 personas han sido desplazadas desde el 1 de febrero.

Los militares se aprovechan del resurgimiento de la pandemia de COVID-19 para tomar nuevas medidas represivas contra los médicos, los enfermeros y todo miembro del personal de la salud que apoye a la oposición democrática. Han saqueado hospitales y detenido a voluntarios. Además, las fuerzas armadas bloquean la llegada de medicamentos del exterior y confiscan los cilindros de oxígeno. Muchos hospitales han sido clausurados o puestos bajo control militar. En las cárceles, los presos políticos están expuestos a la COVID-19.

En muchas fábricas de confección de prendas de vestir, los trabajadores, en su mayoría mujeres, trabajan sin ningún equipo de protección, y las personas afectadas por esta enfermedad siguen trabajando al lado de sus compañeros.

Con el 60 % de los establecimientos de salud inactivos, es imposible administrar vacunas, que pueden salvar vidas, contra la COVID y otras enfermedades. Los expertos en salud pública en Myanmar predicen que el 50 % de la población del país podría contagiarse con las variantes Alfa o Delta de la COVID-19 si no se toman precauciones de manera inmediata.

El secretario general de la ONU, Guterres, condenó “la continua violencia brutal de los militares en Myanmar” y reiteró que “sigue apoyando al pueblo de Myanmar y su objetivo de lograr un Myanmar pacífico, estable y próspero”, así como también pidió “una respuesta internacional firme y clara” y “que se ponga fin a las violaciones de los derechos humanos fundamentales para retomar el camino de la democracia”.

Los datos recientes publicados por organismos internacionales son sumamente preocupantes:

- El Banco Mundial, en el *Myanmar Economic Monitor* de julio de 2021, destaca la manera en que la combinación del golpe de Estado y la pandemia de COVID-19 provocará una caída del 30% del PIB de Myanmar en 2021.
- El PNUD declaró que, en el corto plazo, 25 millones de personas, casi la mitad de los 54 millones de habitantes, caerán en la pobreza absoluta.
- La OIT calculó que “en el primer semestre de 2021 se perdió alrededor del 14 % de las horas de trabajo, lo que equivale a las de al menos 2,2 millones de trabajadores a tiempo completo”. La contracción de la economía en aproximadamente un 6 % en el segundo trimestre de 2021 resultará en una pérdida de 1,2 millones de empleos. Las mujeres se vieron más afectadas por la pérdida de puestos de trabajo que los hombres. Los sectores críticos más afectados son la construcción, la vestimenta, el turismo y la hotelería, los cuales disminuyeron su actividad en aproximadamente un 35 %, un 31 % y un 25 %, respectivamente, con pérdidas relativas de horas de trabajo aún mayores.

A medida que aumenta el uso de la violencia por parte de los militares contra los manifestantes pacíficos, los sindicatos de Myanmar reiteran la necesidad urgente de una acción internacional coordinada y firme para hacer frente a las profundas emergencias políticas, económicas, sociales y sanitarias que están poniendo en riesgo el futuro de todo el país.

Los sindicatos de Myanmar trabajan en estricta coordinación con el Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por sus siglas en inglés), recientemente designado, que incluye representantes de diferentes partidos y nacionalidades étnicas. El NUG está trabajando en apoyo del pueblo birmano contra la represión militar y la destrucción de todo el país, independientemente de sus diferencias étnicas y religiosas. Esto incluye a los rohinyá, con quienes el NUG se comprometió a respetar sus derechos de ciudadanía, una condición básica para su regreso voluntario, digno y seguro.

Los sindicatos de Myanmar apoyan plenamente la lucha del NUG en la Asamblea General de la ONU por la verificación de sus credenciales ante la ONU y por el apoyo total de todos los gobiernos que pertenecen a esta organización.

Desde el 1 de febrero, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar ha estado trabajando a favor de la adopción de sanciones económicas integrales para cortar los ingresos de los militares con el fin de estrangular su poder y obligarlos a retirarse. Algunos países, incluidos los 27 Estados miembros de la Unión Europea, EE. UU., Canadá y otros, presentaron sanciones con respecto a algunos activos clave controlados por las fuerzas armadas y contra las empresas de los sectores de gemas, madera y minería. Se emitieron prohibiciones económicas y restricciones de viaje contra los líderes principales de la junta. La junta militar depende, en gran medida, de los ingresos del

sector del petróleo y el gas. Es necesario un llamado internacional coordinado para boicotear e imponer sanciones al ejército con el fin de cortar sus principales fuentes de ingresos.

Por lo tanto, IndustriALL Global Union y sus afiliados a nivel mundial resuelven:

- Apoyar la campaña a favor de sanciones económicas integrales contra la junta militar en Myanmar:
 - o exigiendo a los gobiernos que ejerzan presión sobre las empresas multinacionales y las marcas mundiales para que detengan sus actividades, retiren sus inversiones, dejen de hacer pedidos y corten sus vínculos comerciales con Myanmar;
 - o exigiendo a las empresas multinacionales y las marcas mundiales con sede en nuestros países que detengan sus actividades, retiren sus inversiones, dejen de hacer pedidos y corten sus vínculos comerciales con Myanmar, bajo la condición de que garanticen el respeto de los derechos y prestaciones laborales de los trabajadores al hacerlo y, particularmente, que los proveedores paguen indemnizaciones a sus empleados cuando cierren las fábricas, sin abandonar el diálogo cercano con los sindicatos.
- Ejercer presión sobre sus gobiernos nacionales para exigir sanciones políticas y económicas integrales contra la junta militar (especialmente en los sectores de petróleo y gas, de seguros y financiero), así como sanciones contra los conglomerados militares: MEC y MEHL, la compañía estatal de gas y petróleo, MOGE, y sanciones especialmente dirigidas a los líderes del ejército.
- Ejercer presión sobre sus gobiernos nacionales para exigir:
 - la verificación de las credenciales del NUG en la Asamblea General de la ONU.
 - que la junta militar de Myanmar libere de forma inmediata e incondicional a todos los líderes políticos, trabajadores, sindicalistas y defensores de los derechos humanos encarcelados en el país simplemente por ejercer sus derechos humanos y laborales.
- Exigir la anulación de todas las órdenes de arresto contra sindicalistas y activistas sindicales por sus acciones pacíficas, y reclamen el fin de los ataques a la libertad sindical y de expresión en Myanmar.
- Apoyar la campaña internacional a favor de un embargo de armas mundial e integral.
- Proporcionar a IndustriALL cualquier información relativa a los vínculos comerciales del ejército de Myanmar para su seguimiento.
- Exigir a los gobiernos que proporcionen ayuda humanitaria a través del NUG y los sindicatos en Myanmar.

IndustriALL continuará coordinando sus actividades con la CSI y el Consejo Global Unions para poner fin de manera efectiva al régimen del terror de la junta militar y colocar a Myanmar nuevamente en el camino hacia una democracia en la que los trabajadores y sus representantes puedan volver al libre ejercicio de sus derechos fundamentales.

